



SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



Reseñas

ARGUMENTATIVAS

RESEÑA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 430/2013

PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

LA EXISTENCIA DE UN ACTA DE
NACIMIENTO CON EL REGISTRO DE UN
PADRE LEGAL NO ES OBSTÁCULO PARA
ADMITIR LA PRUEBA PERICIAL EN
GENÉTICA EN UN JUICIO DE
INVESTIGACIÓN DE PATERNIDAD



RESEÑA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 430/2013

MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ
SECRETARIA ADJUNTA: LUZ HELENA OROZCO Y VILLA

PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

LA EXISTENCIA DE UN ACTA DE NACIMIENTO CON EL REGISTRO DE UN PADRE LEGAL NO ES OBSTÁCULO PARA ADMITIR LA PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA EN UN JUICIO DE INVESTIGACIÓN DE PATERNIDAD


*Cronista: Mtra. Nicole Elizabeth Illand Murga**

En sesión celebrada el 28 de mayo de 2014, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 430/2013, entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver cada uno de ellos, asuntos de su competencia.

El tema a dilucidar en la contradicción de tesis consistió en determinar si en un juicio de investigación de paternidad promovido en representación de un menor, constituye un obstáculo para la admisión de la prueba pericial en genética la circunstancia de que en el acta de nacimiento del niño o la niña obre el registro de un padre legal.

Al respecto, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito estableció que la existencia de un reconocimiento legal de paternidad descrito en el acta de nacimiento no era un obstáculo para admitir la prueba pericial en genética, toda vez que el alcance demostrativo de aquél documento público no constituye un conocimiento pleno de los orígenes biológicos del reconocido, y esta certeza únicamente la puede proporcionar la prueba pericial en comento; consecuentemente, dicho tribunal concluyó que, a fin de salvaguardar el

* Funcionaria adscrita a la Unidad de Crónicas de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica.




derecho del menor a conocer su identidad personal, dicho medio de convicción debe admitirse en un juicio de reconocimiento de paternidad.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito estimó que la admisión de la prueba pericial en genética en un juicio en el que se investiga la paternidad biológica sólo resulta jurídica cuando el actor legalmente carezca de un padre, lo cual no acontecía cuando en el acta de nacimiento del actor consta que fue registrado por su madre durante el matrimonio habido con un hombre, a quien, por tanto, se le otorgó la paternidad relativa a pesar de no haber comparecido personalmente al Registro Civil. Por ende, el tribunal concluyó que cuando exista un padre registral, debe entenderse que cuenta con un padre para todos los efectos legales de la filiación, lo cual hace improcedente la admisión de la prueba pericial en genética.

En virtud de tal oposición de criterios, el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, denunció la posible contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que previo cumplimiento de los trámites respectivos, se admitió dicha denuncia y se registró bajo el número de expediente 430/2013. Asimismo, se determinó la competencia de la Primera Sala para conocer del asunto y se ordenó turnar los autos al **señor Ministro José Ramón Cossío Díaz**, a fin de que elaborara el proyecto de resolución correspondiente.

En las consideraciones adoptadas para resolver el asunto, la Primera Sala destacó que en el ejercicio interpretativo realizado por los tribunales contendientes, éstos utilizaron de manera indistinta el reconocimiento y la investigación de paternidad, a pesar de que son dos instituciones jurídicas distintas, siendo que la manera correcta de referirse a la acción promovida en los respectivos juicios naturales que dieron origen a los asuntos resueltos por dichos órganos jurisdiccionales, era la de **investigación de paternidad**, ya que fueron los propios menores, con la representación de sus progenitoras, quienes acudieron a juicio a indagar tal aspecto.



Dicho lo anterior, se destacó que en las legislaciones que interpretaron los tribunales en comento, se proponía un sistema “cerrado” de la investigación, pues tanto el Código Familiar del Estado de Sinaloa¹ como el Código Civil del Estado de México,² limitan la acción de investigación de paternidad a los hijos nacidos *fuera del matrimonio*, ya que aquellos “hijos de matrimonio” gozan de la presunción de tener un vínculo filial con el marido de su madre, a menos que éste los haya desconocido y se estima que jurídicamente tienen un padre cuando existe un acta de nacimiento en la que se precisa el reconocimiento legal de dicho vínculo.

En ese orden, la Sala estimó que a fin de determinar si para la admisión de la prueba pericial en genética en un juicio de investigación de paternidad promovido en representación de un menor, debía dejarse insubsistente, o no, de manera previa una filiación establecida, era necesario precisar que, aun cuando la indagatoria en sí no constituye un derecho, lo cierto era que tal figura representa una de las vías para hacer valer el derecho a la identidad,³ por lo que consecuentemente, cualquier regulación sobre la acción de investigación de paternidad incide directamente en el ejercicio de tal derecho.

Contenido y alcances del derecho de los menores a la identidad en el juicio de investigación de paternidad.

La Primera Sala precisó que con apoyo en el marco internacional de los derechos del niño, ya se había pronunciado en diversas ocasiones sobre el contenido del derecho de los menores a la identidad,⁴ al

¹ **Código Familiar del Estado de Sinaloa**

Capítulo VII De la Investigación de la Paternidad y la Maternidad

Artículo 304.- *La investigación de la paternidad y maternidad de los nacidos fuera del matrimonio está permitida y se demostrará a través de las pruebas biológicas. Para demandar, será principio de prueba, la imputación al demandado de una situación objetiva que vaya a ser acreditada en el proceso.*

² **Código Civil del Estado de México**

Capítulo III Del Reconocimiento de los hijos nacidos fuera del Matrimonio.

Artículo 4.175. - *La investigación de la paternidad de los hijos, está permitida: I. En los casos de rapto, estupro o violación; II. Cuando se encuentre en posesión de estado de hijo; III. Cuando haya sido concebido durante el tiempo en que la madre hizo vida marital con el presunto padre; IV. Cuando el hijo tenga a su favor un principio de prueba contra el presunto padre. La proporción de alimentos no presume filiación.*

³ La Primera Sala realizó tal precisión en la contradicción de tesis 50/2011, en donde se estimó que no debe ser obstáculo para la indagatoria de paternidad el hecho de que el presunto padre haya estado casado con persona distinta a la madre al momento de la concepción, ya que lo contrario, dejaría el interés superior del niño a merced de la voluntad del presunto progenitor y no se respetaría su derecho fundamental a conocer su identidad.

⁴ Ver las contradicciones de tesis 154/2005, 50/2011 y 152/2012.



reconocer que tal derecho cuenta con rango constitucional⁵ y tiene un núcleo esencial de elementos claramente identificables que incluyen el derecho al nombre, a la nacionalidad y el derecho a las relaciones familiares, todo lo cual va acompañado de la obligación del Estado de reconocerlos y garantizarlos.

Destacó que si bien se reconoce que la identidad se construye a través de múltiples factores psicológicos y sociales, en términos de derechos, la imagen propia de la persona se determina en buena medida, por el conocimiento de sus orígenes y su filiación, así como por la identificación que tiene en la sociedad a través de un nombre y una nacionalidad, e incluso, de la determinación de dicha filiación se desprenden a su vez otros derechos del menor, como son los derechos alimentarios y sucesorios.⁶

Puntualizó que no puede estimarse que, bajo cualquier circunstancia, un menor en cuya acta de nacimiento obra el nombre de un padre legal, ya tenga “satisfecho” su derecho a la identidad, ya que éste se integra, a su vez, por varios derechos, como es el de indagar y conocer la verdad de sus orígenes, lo cual implica el derecho a solicitar y recibir información sobre su origen *biológico*, mismo que, además, le traerá beneficios en su derecho a la salud, en su vertiente de prevención y tratamiento de enfermedades.⁷

En ese entendido, se señaló que los alcances que se otorguen al derecho de un menor a la identidad biológica deben atender a su **interés superior**, al ser ello un mandato constitucional,⁸ conforme al cual, toda actividad interpretativa relacionada con una norma jurídica que deba aplicarse a un menor en un caso o que pueda afectar sus intereses debe

⁵ Dicho rango deriva del artículo 4° de la Constitución Federal y de los artículos 7° y 8° de la Convención sobre los Derechos del Niño.

⁶ Lo anterior encuentra sustento en la tesis 1a. CXVI/2011 de rubro: “**DERECHO A LA IDENTIDAD DE LOS NIÑOS.**”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1034.

⁷ Sirve de apoyo la tesis 1a. CXLII/2007, de rubro: “**DERECHO A LA IDENTIDAD DE LOS MENORES. SU CONTENIDO**”, así como la tesis 1a. LXXI/2013, de rubro: “**INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SUS ALCANCES EN UN JUICIO DE RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD.**”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, mayo de 2013, página 541

⁸ Mandato contenido en el artículo 4° Constitucional.



estar orientada por dicho interés superior,⁹ el cual es un principio jurídico protector, que implica maximizar el cúmulo de derechos de los niños, y en esta vertiente más general, tal interés se traduce en un escrutinio estricto en cuanto a la necesidad y proporcionalidad de cualquier medida legislativa que pretenda restringir el ejercicio de sus derechos, ya que supone considerar en la interpretación normativa su especial situación de vulnerabilidad así como las medidas de protección reforzada a cargo del Estado.

En tal sentido, se consideró que un primer paso, era analizar si se persigue un fin legítimo con la restricción hermenéutica consistente en impedir la admisión de la pericial en genética en un juicio de investigación de paternidad bajo el argumento de que, *previamente*, el menor debe desembarazarse de una filiación matrimonial establecida extrajudicialmente.

Para ello, se desentrañó el sentido de las disposiciones que se refieren a la filiación y se señaló que, históricamente, los ordenamientos civiles buscaron consolidar la unión matrimonial, afianzando la seguridad jurídica, para lo cual se valieron de presunciones que hacían prevalecer una ficción querida por la ley, aunque no correspondiera con la realidad biológica y establecieron una lista taxativa de las personas legitimadas para cuestionar la paternidad de un “hijo de matrimonio”.

En cuanto al sistema “cerrado” de la investigación de la paternidad para los hijos nacidos *fuera de matrimonio*, se indicó que los legisladores pretendieron evitar la existencia de juicios escandalosos que pusieran en peligro la familia matrimonial, ya que la indagatoria de paternidad promovida por un menor reconocido legalmente por el cónyuge de su madre, implicaba que esta última hubiera sostenido una relación extramarital; no obstante, la Sala precisó que ni la consolidación del vínculo matrimonial ni la evitación de escándalos son objetivos

⁹ Apoya lo anterior, la tesis 1a. XV/2011 de la Primera Sala, de rubro: “**INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL**”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, febrero de 2011, página 616,



válidos para hacer nugatorio el derecho a la identidad del menor, pues incluso, se hizo notar que en la diversa contradicción de tesis 50/2011 resuelta por la Primera Sala, ya se había sostenido que para la indagatoria de paternidad, el derecho del niño a conocer su identidad debe prevalecer frente a la protección de la estabilidad del matrimonio.¹⁰

Por otro lado, se precisaron los principios rectores en materia de filiación que necesariamente informan la regulación de acciones como la de investigación de paternidad y la admisión de la prueba pericial en materia genética, los cuales son:

- a) No discriminación entre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio;
- b) Verdad biológica;
- c) Incompatibilidad entre filiaciones contrapuestas, y
- d) Protección del interés del hijo.

En cuanto al **principio de no discriminación**, se dijo que éste comprende de manera fundamental a los hijos, sin que deban efectuarse distinciones en cuanto a sus derechos según hayan nacido dentro o fuera del matrimonio, ya que desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos se equiparó a la filiación matrimonial con la extramatrimonial¹¹ y tal formula incluso se protege en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.¹²

No obstante, se hizo hincapié en que no se vulnera tal principio cuando se hace referencia expresa a la filiación matrimonial y extramatrimonial, pues lo cierto es que, una realidad se presenta cuando los padres están casados y otra distinta cuando no lo están, pero lo que

¹⁰ Dicho criterio dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 75/2011, de rubro: "INDAGATORIA DE PATERNIDAD. NO ES OBSTÁCULO PARA LA MISMA QUE EL PRESUNTO PADRE HAYA ESTADO CASADO CON PERSONA DISTINTA A LA MADRE DEL NIÑO, AL MOMENTO DE SU CONCEPCIÓN (ARTÍCULO 315 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE HASTA EL 7 DE OCTUBRE DE 2010).", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 663.

¹¹ **Artículo 25 (Declaración Universal de los Derechos Humanos).**

[...] 2. La maternidad y la infancia tienen derechos a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Esta misma equiparación se contempló en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 12 de mayo de 1981.

¹² **Artículo 17. Protección a la familia**

(...) La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.




se prohíbe, en todo caso, es que el tratamiento legislativo diferenciado impacte en el ejercicio de los derechos emergentes de estos vínculos filiales.

La Sala indicó que este último supuesto se configuraba con el sistema “cerrado” de investigación de paternidad contenido en las legislaciones civiles del Estado de México y Sinaloa que analizaron los tribunales contendientes, lo cual impactaba directamente en el ejercicio del derecho a la identidad de las personas, pues resultaba discriminatorio que la investigación de paternidad pudiera ejercerse sólo por los hijos nacidos *fuera del matrimonio*, ya que de ser así, se estaría efectuando una distinción entre las personas, únicamente en razón a si nacieron dentro o fuera del vínculo matrimonial, y acontecería similar situación sobre la prueba en materia genética, si se pretendiera impedir su admisión *por la simple razón* de que en el acta de nacimiento del actor ya obrara el registro de un padre legal y, por tanto, se le considerara *hijo de matrimonio*.

En tal virtud, se sostuvo que la justificación de una limitación a la admisión de la prueba pericial en materia genética en el juicio de investigación de paternidad tendría que estar cimentada en *otro* valor constitucional o principio rector en materia de filiación.

Respecto al **principio de verdad biológica**, se subrayó que dentro de un vínculo familiar es imprescindible que la persona sepa quién es, cuál es su nombre, su origen y quiénes son sus padres, a fin de ejercer su derecho a la identidad biológica, tal como se establece en el artículo 7°, inciso 1°, de la Convención sobre los Derechos del Niño que consagra el derecho de los menores a conocer a sus padres, señalándose en el artículo 8° de esa misma Convención, que los Estados se comprometen a respetar ese derecho y a preservar su identidad, incluidos nacionalidad, nombre y relaciones familiares de conformidad con la ley y sin injerencias ilícitas, de tal manera que cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad, los




Estados deben prestar la asistencia y protección para restablecerla con rapidez.

Se enfatizó que constituye un derecho del hijo tener su filiación correspondiente, y no una mera facultad de los padres hacerlo posible, por lo que la tendencia es que la filiación jurídica coincida con la filiación biológica, aunque la misma no siempre sea posible, bien por la propia realidad del supuesto de hecho, o bien porque el ordenamiento haga prevalecer en el caso concreto otros intereses que considera jurídicamente más relevantes.

La Sala refirió que en el primer grupo de supuestos estaba la filiación adoptiva, en la que no existe el lazo biológico, o en las procreaciones asistidas por donación de gametos, casos en los que es la propia legislación la que establece la filiación sin que exista el vínculo genético, mientras que dentro del segundo grupo están algunas de las normas que se ocupan de la determinación extrajudicial de la filiación o que privilegian un estado de familia consolidado en el tiempo, dando preeminencia a la seguridad jurídica, la estabilidad de las relaciones familiares y el propio interés superior del menor por encima del vínculo biológico¹³.

Se indicó que aun al reconocer la existencia de estos supuestos, la verdad biológica se erige como uno de los principios rectores en materia de filiación que alienta a su vez la libre investigación de la paternidad; sin embargo, se señaló que no sólo los principios de no discriminación y de verdad biológica son rectores en materia de filiación, pues otros dos principios que encuentran cabida en nuestra Constitución

¹³ Como ejemplo del segundo grupo de supuestos se aludió al amparo directo en revisión 1321/2013, resuelto por la Primera Sala, en el cual se determinó que no hay disposición constitucional o convencional alguna que impida que, bajo determinadas circunstancias, el Estado mexicano privilegie una identidad filiatoria consolidada en el tiempo que pueda, incluso, no coincidir con la verdad biológica. Ello se sustentó en la debida protección hacia el menor en ciertos casos en los que, el menor pudo haber desarrollado una confianza legítima y pertenencia hacia el cónyuge varón a partir de un vínculo de años, a pesar de no existir vínculo biológico. De tal asunto derivó la tesis 1a. XXIV/2014, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, página 649, de rubro: DESCONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. ALCANCES DEL DERECHO A LA IDENTIDAD EN EL JUICIO RELATIVO, CUANDO AQUÉLLA SE IMPUGNA A LA LUZ DEL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR.



son aquél que versa sobre la incompatibilidad de filiaciones contrapuestas y el principio de protección del interés del hijo.

En cuanto a la **incompatibilidad entre filiaciones contrapuestas** se hizo notar que los efectos de establecer una relación jurídica de filiación no se agotan en el conocimiento de los propios orígenes, sino que implica adquirir un cúmulo de derechos (como es la determinación de los apellidos, derechos alimentarios y derechos sucesorios) así como la asunción de ciertas obligaciones por parte de los padres,¹⁴ de tal manera que cuando se alude a la filiación de una persona en términos jurídicos, se está haciendo referencia a que ésta es el centro de imputación de diversos derechos y deberes.

En ese contexto, se puntualizó que no en toda acción de investigación de paternidad se solicita un desplazamiento filiatorio, pues en ocasiones, la pretensión se limita a conocer su nexo biológico sin que ello implique la nulidad del acta de nacimiento o una modificación en su estado de familia; otras veces, la pretensión consiste en el reconocimiento de paternidad con todos los derechos y obligaciones que conlleva la filiación, por lo que dependerá de las pretensiones señaladas en la demanda, así como de la integración de la litis, que la sentencia definitiva impacte o no en el estado de familia del menor.

Se sostuvo que en los casos en los que la pretensión del actor es establecer una nueva filiación jurídica, la seguridad jurídica y el propio interés superior del menor exigen que sea uno solo el vínculo paterno-filial que les da origen, sin que pueda darse el caso de que haya dos paternidades legales simultáneas.

Así, la Primera Sala estimó que la restricción hermenéutica consistente en impedir la admisión de la prueba pericial en genética en un juicio de investigación de la paternidad bajo el argumento de que

¹⁴ Ver la tesis 1a. CXVII/2011 de rubro: “**DERECHO A LA IDENTIDAD DE LOS NIÑOS**”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1034 y la tesis 1a. CXLII/2007, de rubro: “**DERECHO A LA IDENTIDAD DE LOS MENORES. SU CONTENIDO**”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVI, julio de 2007, página 260.



previamente el menor debe destruir o dejar sin efectos una filiación matrimonial establecida extrajudicialmente, sí persigue un fin legítimo consistente en evitar la acumulación de estados de familia incompatibles entre sí; no obstante, se destacó que tal restricción no resultaba idónea, ya que la relación entre el medio y el fin no atiende a la lógica de causalidad, toda vez que la mera admisión de la probanza no se traduce automáticamente en el desplazamiento filiatorio.

Ello, porque la citada prueba pericial constituye la probanza idónea para acreditar el vínculo biológico entre el menor y el demandado, por lo que de admitirse tal probanza, desahogarse ésta y confirmarse el nexo genético entre el menor y el demandado, no quedará duda de que existe una filiación *biológica* entre ellos; sin embargo, ello no significará necesariamente que se modifique la filiación *jurídica* del menor, pues tal cuestión dependerá de otros factores —como son la integración de la litis, el resto del caudal probatorio y de manera preminente, el interés superior del menor— que deberán ser valorados por el juez atendiendo a las circunstancias particulares del caso, y el resultado de tal ejercicio se reflejará hasta el dictado de la sentencia definitiva.

Es decir, se sostuvo que no es la admisión de la pericial en genética la que conduciría a un escenario de doble filiación que fuera contrario al principio de incompatibilidad entre filiaciones contrapuestas, ya que ni siquiera su desahogo implicaría tal circunstancia; de ahí que no exista relación causal entre el fin perseguido y la restricción en materia probatoria, pues la eventual determinación sobre la filiación dependerá de otros elementos que debe analizar el juez y eso será en la resolución que ponga fin al juicio y para ello era necesario aludir a otro principio rector en materia de filiación.

De esta manera, por lo que hizo a ese otro principio rector en materia de filiación, referente a la **protección de interés del hijo**, se sostuvo que, en ocasiones, su protección conducía a prescindir de la verdad biológica, por lo que resultaba posible que surgieran colisiones



entre el principio que privilegia el nexo biológico con aquel que resguarda el interés de la infancia, debiendo ceder el primero frente al segundo, siendo posible que en un caso específico, la determinación judicial de la filiación privilegie un estado de familia consolidado en el tiempo, dando preeminencia a la estabilidad de las relaciones familiares y el propio interés superior del menor por encima del vínculo biológico; pero en todo caso, cualquier decisión sobre el estado filiatorio de un niño o niña, deberá tomar en cuenta las premisas fácticas que rodean el caso concreto y resolverse atendiendo siempre a lo que se estime que sea mejor para el menor.

Sin embargo, se hizo notar que ese principio de protección de interés del hijo, tampoco servía como justificación para impedir la admisión de la prueba pericial en genética en un juicio de investigación de paternidad, toda vez que su *mera admisión* no modifica, en sí misma, el estado filiatorio del menor, pero lo que sí podría acontecer es que su desahogo le genere un daño, es decir, que el conocimiento del resultado de esa probanza produzca un perjuicio en la construcción de su identidad; de ahí que el juez deba analizar cuidadosamente si la *comunicación del resultado al niño o niña* armoniza con su interés superior.

Para ello, se precisó que en aras de proteger el interés del menor, dependiendo de las circunstancias particulares y una vez ponderada su situación familiar, el juez podría dictar las medidas necesarias a fin de mantener el resultado de la prueba pericial en genética en sigilo respecto del niño o niña, hasta en tanto no se emitiera una resolución definitiva sobre su filiación, de ser el caso, a fin de impedir que la constatación del hecho biológico produzca al menor más inconvenientes que los inevitables.

De esta manera, la Sala consideró que en un juicio de investigación de paternidad promovido en representación de un menor, no es obstáculo para la admisión de la prueba pericial en genética que



en el acta de nacimiento del niño o niña obre el registro de un padre legal, ya que si lo que se pretende evitar es la acumulación de estados de familia incompatibles entre sí, la mera admisión de esa prueba no variará por sí sola el estado filiatorio del menor, por lo que el impedimento no resulta idóneo para lograr dicho fin.

Con base en lo anterior, la Primera Sala determinó que si en ese tipo de juicios se impide la admisión de la prueba pericial en genética por existir en el acta de nacimiento del actor un padre registral, ello constituye una restricción que no es idónea ni proporcional, pues limita de manera innecesaria el derecho del menor a la identidad y puede tener como consecuencia su desprotección, además de que resultaría absurdo obligarlo a quedarse previamente en incertidumbre filiatoria para poder conocer su verdadero vínculo biológico, es decir, no se estaría velando por sus intereses si se le exigiera, a fin de probar su filiación, el ejercicio anticipado de una acción que le perjudica.

Consecuentemente, se estimó que debía prevalecer con carácter de jurisprudencia el siguiente criterio:

PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. NO ES OBSTÁCULO PARA SU ADMISIÓN EN UN JUICIO DE INVESTIGACIÓN DE PATERNIDAD QUE OBRE EN EL ACTA DE NACIMIENTO DEL ACTOR EL REGISTRO DE UN PADRE LEGAL (LEGISLACIONES CIVILES DE SINALOA Y EL ESTADO DE MÉXICO). La acción de investigación de paternidad constituye una de las vías para hacer valer el derecho humano de los menores a la identidad, de indudable rango constitucional derivado del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 7° y 8° de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahora bien, cuando en un juicio se ejerce esta acción en representación de un menor, no es obstáculo para la admisión de la prueba pericial en materia genética que en el acta de nacimiento del niño o niña obre el registro de un padre legal. Lo anterior es así ya que, si lo que se pretende es proteger la estabilidad de las relaciones familiares y la salud mental del menor, la mera admisión de la prueba pericial en



genética no afectará por sí sola tales intereses, ya que el juez, de estimarlo conveniente, puede ordenar no dar a conocer los resultados de dicha prueba al menor, si determina que ello es mejor para el niño o niña. Por otro lado, si lo que se pretende evitar es la acumulación de estados de familia incompatibles entre sí, la mera admisión de la prueba pericial en genética no variará por sí sola el estado filiatorio del menor, por lo que el impedimento no resulta idóneo para lograr dicho fin. En efecto, tanto el establecimiento de la verdad biológica como el cambio de la filiación legal dependerán, en su caso, de otros factores —como son la integración de la litis, el resto del caudal probatorio aportado al juicio, y de forma preeminente, el interés superior del menor— los que deberán ser valorados por el juez atendiendo a las circunstancias específicas del asunto al momento de dictar la sentencia definitiva. Una conclusión contraria respecto de la admisión de la prueba pericial en materia genética en el juicio de investigación de paternidad afectaría de manera desmedida el derecho a probar del actor al prohibir la admisión del medio de convicción que resulta idóneo para acreditar su pretensión y haría nugatorio el derecho a la identidad de los infantes.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de la competencia, por mayoría de cuatro votos de los señores ministros **Arturo Zaldívar Lelo de Larrea**, **Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena**, **Olga Sánchez Cordero** y Presidente **Jorge Mario Pardo Rebolledo**, en contra del emitido por el Ministro **José Ramón Cossío Díaz**; en cuanto al fondo, por mayoría de cuatro votos de los ministros Zaldívar Lelo de Larrea, Cossío Díaz, Gutiérrez Ortiz Mena y Sánchez Cordero, quien se reservó el derecho de formular voto concurrente; en contra del emitido por el Presidente Pardo Rebolledo, quien se reservó el derecho de formular voto particular.